SESIÓN DE JURADO DE ACUSACIÓN, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINGUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA HILDA CEBALLOS LLERENAS Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y GABRIEL SALGADO AGUILAR.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con fundamento en los artículos 33 fracción XXXVI y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 42 fracción XX, 72, 80 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 20, 24 y 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 34 fracción III, 113 y 227 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha citado a ustedes a esta Sesión en la que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima se erige en Jurado de Acusación, para conocer la resolución que contiene las conclusiones emitidas por la Comisión de Responsabilidades, con motivo del juicio político instaurado por denuncia popular enderezada por el C. Fidel Alcaraz Checa, en contra de los CC. Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huera Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocío Sandoval Mendoza, integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, en la administración del Periodo Constitucional 2000-2003. Para dar inicio a la presente sesión, solicito a la Secretaría de a conocer al orden del día a que sujetará la presente Sesión.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día de la sesión ordinaria en que el H. Congreso del Estado, se erige en Jurado de Acusación, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. **I.-** Lista de Presentes; **II.-** Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; **III.-** Declaratoria de que el H. Congreso del Estado se erige en Jurado de acusación. **IV.-** Lectura de la Resolución que contiene las conclusiones emitidas por la Comisión de Responsabilidades, relación al juicio político instaurado por denuncia popular enderezada por el C. Fidel Alcaraz Checa, en contra de los CC. Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huera Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocío Sandoval Mendoza, Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, en el Periodo Constitucional 2000-2003; **V.-** Discusión y aprobación en su caso de la resolución presentada por la Comisión de Responsabilidades, a que se refiere el punto anterior. **VI.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente Sesión; **VII.-** Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. **VIII.-** Clausura. Colima, Col, a 14 de junio de 2005. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del orden del día que acaba de ser leído.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputada Presidenta que se aprueba por mayoría.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. El siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de presentes Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Rosa Beltrán Padilla, Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; el de la voz, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Ciudadana Presidenta informo ciudadano Presidenta que están presentes los 25 Diputadas que conformamos esta Legislatura.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo las doce horas con dieciséis minutos del día 14 de junio del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Con fundamento en el artículo 239 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, instruyo a la Secretaría de fe de que las partes involucradas en el presente asunto, fueron debidamente citadas:

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Se da cuenta de la cédula citatorio, oficio y oficio citatorio, de fecha 10 de junio de 2005, suscrito por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, así como del acta de notificación y citatorio levantada con los que se comprueba fehacientemente que los ciudadanos Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espiritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huera Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocío Sandoval Mendoza, que integraron el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, en el período Constitucional 2000-2003, así como el ciudadano Fidel Alcaraz Checa, y los autorizados y defensores

Licenciados Magdalena Harayd Ureña Pérez, Porfirio Fuentes Quintana y José Gabriel Martínez Salazar, fueron debidamente citados.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Presidencia declara que a partir de este momento el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, se erige en jurado de acusación para conocer la resolución que contiene, las conclusiones elaboradas por la Comisión de Responsabilidades, en relación a la denuncia de Juicio Político, presentada por el ciudadano Fidel Alcaraz Checa, en contra de los ciudadanos Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huerta Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocío Sandoval Mendoza, integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, en la administración del período constitucional 2000-2003. A continuación solicito a la Secretaría haga constar en esta sesión, e informe a esta Presidencia si se encuentran presentes los ciudadanos Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huera Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocío Sandoval Mendoza, integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, en la administración del período constitucional 2000-2003, así como el denunciante Fidel Alcaraz Checa, partes involucradas en el presente asunto y sus autorizados o defensores, los ciudadanos licenciados Magdalena Harayd Ureña Pérez, Porfirio Fuentes Quintana y José Gabriel Martínez Salazar, a quienes se le solicite se identifiquen ante la Secretaría de este H. Congreso del Estado, entregando documento oficial, con fotografía al personal de apoyo de la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la ciudadana Presidenta, procedo a verificar la presencia de los ciudadanos que se han mencionado solicitando amablemente se sirvan, si se encuentran en el recinto de esta H. Asamblea, se sirvan ponerse de pie, favor de hacerlo, ponerse de pie, si se encuentran en este momento, en este Recinto, los ciudadanos, me voy a permitir mencionarlos nuevamente Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huera Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocío Sandoval Mendoza, quienes fueron integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, en la administración del período Constitucional 2000-2003, así como también si se encuentra el denunciante Fidel Alcaraz Checa, y los autorizados o defensores, ciudadanos licenciados Magdalena Harayd Ureña Pérez y Porfirio Fuentes Quintana, así como José Gabriel Martínez Salazar, si se encuentran favor de ponerse de pie, para la correspondiente identificación y fe de su presencia.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. En el desahogo del

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. No obstante de haber sido citados como se ha mencionado en esta sesión y que consta por las actas que se tienen presentes, se hace del conocimiento ciudadana Presidente y haber sido citados y nombrados en esta sesión y solicitados su presencia y ponerse de pío, se le hace saber que no se encuentran ninguno de los ciudadanos que hemos mencionado ni sus representantes. Cumplidas sus instrucciones Diputada Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al Diputado Secretario José Luis Aguirre Campos, de lectura a la resolución que contiene las conclusiones emitidas por la Comisión de Responsabilidades, con motivo del juicio político instaurado por denuncia popular enderezada por el ciudadano Fidel Alcaraz Checa, en contra de los ciudadanos Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huera Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocío Sandoval Mendoza, integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, en la administración del período Constitucional 2000-2003.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Atendiendo a la instrucción de la Diputada Presidenta, doy a conocer la resolución en comento. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 230.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Conforme al punto siguiente del punto del orden del día, se pone a consideración de la Asamblea el documento de la Comisión de Responsabilidades, leído con anterioridad. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS ¿Diputado Martín Flores Castañeda? ¿Diputado Héctor Bautista Vázquez?

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra a favor el Diputado Martín Flores Castañeda, el Diputado Héctor Bautista Vázquez, el Diputado Jubal Ayala Jiménez y el Diputado ¿Armando? Jubal, y en contra los Diputados Fernando Antero Valle, el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, y la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Margarita por la Comisión. Bien. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Muy buenas tardes. Con su permiso Diputada Presidenta. Amigas y amigos Diputados. Público asistente. Esta tarde, el H. Congreso del Estado de Colima, se ha erigido en Jurado de

Acusación para conocer la resolución de Juicio Político, instaurado a los Regidores del H. Ayuntamiento de Colima, por el período 2000-2003. Es un hecho histórico dado que esta Soberanía, en pleno uso de las facultades que le confiere la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley Orgánica del Congreso del Estado, su Reglamento, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y por conducto de la Comisión de Responsabilidades, ha substanciado el procedimiento de juicio político y ha llegado a las conclusiones que se presentan a la consideración de esta Soberanía. Es importante que ustedes conozcan que el 20 de octubre de 2004, una vez designadas las comisiones correspondientes, a la Comisión de Responsabilidades, que presido, le fue turnado el expediente de juicio político en discusión, el cual fue turnado para su estudio, análisis y resolución, constando éste de 1425 fojas útiles, las cuales fueron analizadas por la Comisión de Responsabilidades, misma que el cuatro de mayo de 2005, tuvo a bien formular, perdón de 2004, 4 de mayo de 2004, tuvo a bien formular las conclusiones que hoy están sujetas a discusión y aprobación en su caso. Octubre de 2003, perdón es octubre de 2003, cuando le fue turnado el expediente, 2004, a la Comisión de Responsabilidades, el 20 de octubre de 2003; y el 4 de mayo de 2004, se emite la resolución correspondiente. Decirles también que en su calidad de munícipes los denunciados Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Ma. Esther Ochoa Espiritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huerta Duarte, Ma. Teresa Márquez Gómez y Ma. del Rocío Sandoval Mendoza, propusieron en sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, de fecha 20 de abril de 2002, la sanción del síndico municipal Marco Antonio García Toro, consistente en la suspensión por un lapso de tres meses, lo cual fue acordado en la misma sesión de cabildo, con el voto de los propios denunciados. Al respecto, se ha llegado a la conclusión de que los denunciados, con la calidad de servidores públicos de representación popular que tienen reconocido en autos, obraron de manera incorrecta al proponer y decidir en la sesión de cabildo número 47 de fecha 30 de abril de 2002, la suspensión en sus funciones del síndico Marco Antonio García Toro, actitud con la cual se arrogaron una facultad que no tienen, y en consecuencia se actualiza la hipótesis señalada en los artículos 6 y 7 fracciones V y VI de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Fundamentalmente la fracción V del artículo 7 que señala que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, fracción V, la usurpación de atribuciones y la VI, "Cualquier infracción dolosa o de mala fe a la Constitución General de la República, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, o a las Leyes que de ellas emanen cuando causen perjuicios graves a la Federación, al Estado, a la Sociedad, o motiven algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones" En el caso que nos ocupa, es claro que los denunciados no tenían las facultades para suspender de sus funciones al Síndico Marco Antonio García Toro, porque no existe disposición constitucional ni legal alguna que así los faculte, todo servidor público esta obligado a hacer solamente lo que la ley le faculta. La autoridad competente para suspender del cargo a los munícipes, cuyo origen es el voto de los ciudadanos es el Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido por los artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 33 fracción XVII y 87 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que ya fueron citados en las conclusiones puestas a consideración. En consecuencia los denunciados al haber propuesto la suspensión del síndico municipal, Marco Antonio García Toro en la Sesión de Cabildo de fecha 30 de abril de 2002, y votar favorablemente en esa misma sesión, determinado además que a partir de ese momento quedaba suspendido el munícipe de referencia aún cuando hayan pretendido fundamentar su proceder con base en lo

dispuesto por los artículos del 131 al 135 de la Ley del Municipio Libre y 52 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cierto es que su proceder fue contrario a lo preceptuado por los artículos antes señalados. La Comisión dictaminadora considera que este Congreso del Estado, depositario de la soberanía del pueblo de Colima, no puede ni debe soslayar el hecho de que en ese entonces, los munícipes del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, por el período 2000-2003, incurrieron en las irregularidades anotadas y atentaron contra la voluntad popular, que decidió que uno de sus integrantes fuera el síndico indebidamente suspendido Marco Antonio García Toro. Efectivamente, debemos de considerar que el Síndico del Ayuntamiento, es un funcionario público de elección popular, esto es, que su origen es la voluntad del pueblo que se manifestó en las urnas y que por lo tanto, no puede ser removido, sea bajo la figura de suspensión de sus funciones temporal o definitivamente en sus funciones, o en la revocación del mandato, sino mediante un procedimiento seguido ante este H. Congreso del Estado, que constitucionalmente es el depositario de la Soberanía y que por consiguiente representa a esa voluntad del pueblo, dejar pasar ese hecho, en el que un grupo de munícipes se arroguen la facultad de suspender en sus funciones a otro de los integrantes del Cabildo al que pertenecen es permitir que se vulnere la popular soberana del pueblo, bajo el argumento como la de decir que el Cabildo es el superior jerárquico de los munícipes y que por lo tanto pueden sancionarlos con la suspensión en sus funciones de manera temporal. Los munícipes del Ayuntamiento de Colima al suspender al Síndico municipal impidieron que este cumpliera con las funciones propias de su encargo, los munícipes decidieron optar por las sanciones debido a que el síndico se opuso con bastante frecuencia, como lo señalan en la propia acta de cabildo, que motivo la suspensión a los manejos financieros de la administración presidida por Enrique Michel Ruiz, quien pudiendo evitar la sanciones omitió su actuación y con ello permitió que la Constitución y el marco legal del estado, fuera trasgredido. Como es del conocimiento de los conocimientos y obra en las actas del Cabildo, la primera suspensión fue el 30 de abril de 2002, y a esta le siguieron otras cinco por el mismo supuesto. Fueron suspensiones ilegales, que deben de ser sancionadas por los procedimientos empleados por los munícipes, en ningún momento se apegaron a derecho, y se abrogaron facultades que no les compete. Es por ello, que atento a lo expresado en las conclusiones ya dadas a conocer a todos ustedes, señoras y señores Diputados, miembros de este Jurado de Acusación, que la Comisión de Responsabilidades, propone imponer la sanción de inhabilitación para ocupar cargo, empleo o comisión dentro del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima a los munícipes denunciados y turnar el expediente para que en Jurado de Sentencia el Supremo Tribunal de Justicia, imponga la sanción correspondiente. Es importante precisar que las conclusiones a que hemos arribado son estrictamente apegadas a derecho, se encuentran fundadas y debidamente motivadas, que Colima merece que su Soberanía popular respete y haga respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen. Por ello, solicito a ustedes, amigas y amigos Diputados en un acto de responsabilidad, en un acto de apego al estado de derecho, emitir su voto a favor de las conclusiones presentadas. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Antero Valle.

DIP. ANTERO VALLE. Con su venía Diputada Presidenta. Antes de iniciar con mi posicionamiento en contra del dictamen, quisiera darle lectura al artículo 22 del presente dictamen, que dice: El dictamen correspondiente será presentado al Congreso en la sesión inmediata siguiente a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 40 de este ordenamiento si se encuentra en período ordinario o en una sesión extraordinaria convocada para tal efecto, dentro de los 3 días naturales siguientes: el dictamen será entregado a cada uno de los Diputados por lo menos 24 horas antes de la sesión de referencia. Sin este requisito no se podrá llevar a cabo la Sesión. El Presidente del Congreso velará por el estricto cumplimiento de esta previsión que no admitirá dispensa alguna. En este momento solicito a la Diputada Presidenta que reponga el procedimiento para el desahogo correcto de esta Sesión.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso.....RECESO..... Se reanuda la sesión y se desecha la petición del Diputado Fernando Antero Valle, por ser notoriamente improcedente. Continúa en uso de la palabra el Diputado Fernando Antero.

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso Diputada Presidenta. La notoriedad de la improcedencia tendrá que verificarlo los tribunales correspondientes. El día de hoy acudimos a esta cita con la convicción de que un Estado democrático de derecho se funda, ante todo y en primer lugar, por el respeto que se le debe tener a la Constitución y a sus postulados. Podrá argumentarse a favor o en contra sobre el proceder de los ex-regidores del H. Ayuntamiento de Colima del periodo 2000-2003, respecto a la inhabilitación de quien fuera Sindico Municipal, pero eso, en estos momentos ya no es el punto esencial de la cuestión que nos reúne ahora. Hoy se trata de un asunto que tiene que ver con la negligencia en el actuar de la Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso, porque quedará demostrado que conforme a la Constitución Federal, en su artículo 114, es jurídicamente imposible sancionar a los citados ex-regidores. Ha sido la Constitución la que ha decidido ya sobre el destino de los expedientes de juicio político instaurados contra los exregidores, y ese es el destino y no otro más que la imposibilidad jurídica para sancionarlos. Veamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108, como en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 119 que nos dan una definición de los Servidores Públicos, ya que considera como tales entre otros, a los funcionarios, empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal así mismo, también contempla a otros funcionarios que también serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas actividades. La responsabilidad a que se ha hecho alusión, se encuentra regulada en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Título XI, del Capítulo Único de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; cada una de ellas, en el ámbito de sus respectivas competencias. En el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, expone lo siguiente: "Para los efectos de las responsabilidades que puedan incurrir los servidores públicos, se reputarán como tales a los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Ejecutivo y Judicial del

Estado, a los integrantes del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.” En el caso que nos ocupa y tratándose de los exregidores de nombres: Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, María Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huerta Duarte, María Teresa Márquez Gómez y María del Rocío Sandoval Mendoza, y toda vez que los ahora nombrados tuvieron el carácter de funcionarios de la administración pública municipal al ser integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Colima, desempeñándose con ese carácter durante el periodo 2000-2003, y de conformidad con el juicio político que ha instaurado en su contra por la presunta comisión de faltas oficiales en que supuestamente incurrieron dichos funcionarios en la sesión de Cabildo celebrada el 30 de abril del año dos mil dos; cabe precisar lo siguiente: Primero.- Atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, menciona que los delitos y faltas oficiales en que incurran los funcionarios públicos especificados en el 119 del primero de los ordenamientos legales citados, conocerán el Congreso del Estado como jurado de acusación y el Supremo Tribunal de Justicia, en acuerdo pleno, como jurado de sentencia, el cual, como órgano de sentencia, le corresponde imponer las sanciones a los funcionarios públicos responsables. Segundo.- Ahora bien, no obstante lo anterior, no se debe soslayar lo que expresamente dispone el artículo 114 de la Constitución General que establece: “El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.” Como puede observarse, las sanciones que en su caso pudieran imponerse en el caso que nos ocupa, solo podrían aplicarse en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. Luego entonces, pasado dicho periodo de un año, resulta jurídicamente imposible pretender que se aplique, o mas aún, aplicar sanción alguna a los que tuvieron el carácter de servidores públicos durante el periodo 2000-2003, ya que sostener lo contrario estaría contraviniendo a todas luces y de manera fehaciente, lo que expresamente establecido en el ordenamiento constitucional. Se sostiene lo dicho con anterioridad, ya que el procedimiento de juicio político en contra de los exregidores inició formalmente el día 17 de mayo de 2002, según consta en el acuerdo emitido en esa fecha por la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado que ordenó incoar el procedimiento respectivo. A partir del día 17 de mayo de 2002, se tenía un año para tramitar todo el procedimiento de juicio político y aplicar sanciones, sin embargo, han transcurrido a partir del día citado, tres años con veintiocho días hasta el día de hoy, lo cual, es evidente que el motivo en el cual se encuentra reunido el Pleno en este momento, pretendiendo erigirse en jurado de acusación dentro del juicio político instaurado en contra de los exregidores Joaquín Álvarez Neri, Julián Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, María Esther Ochoa Espíritu, Gonzalo Méndez Ortega, Roberto Huerta Duarte, María Teresa Márquez Gómez y María del Rocío Sandoval Mendoza, resulta ahora notoria y formalmente improcedente, ya que ha transcurrido en exceso el plazo concedido por la legislación antes citada para su iniciación y para la aplicación de la sanciones que en el caso en particular pudieran corresponder. En consecuencia consideramos que con apego a la Constitución el juicio político en cuestión no es en estos momentos procedente. Por lo tanto, la Fracción

Parlamentaria del Partido Acción Nacional ha determinado votar en contra del dictamen en el cual se pretenda acusar a los exfuncionarios públicos a que se ha hecho mención. Es cuanto Diputada Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Bautista Vázquez.

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores que nos acompañan. Creo que en cualquier situación y específicamente en la actuación de un cabildo debe de saberse el procedimiento adecuado y correcto para destituir a un miembro de ese Cabildo, pero si sabiéndolo aún así se actúa en consecuencia es peor y se aprecia dolo, como considero que se actúo en este Cabildo. Y quiero decirles que la Comisión de Responsabilidades, ha actuado y actúo de una manera responsable, específicamente en el procedimiento de sanción que se propone, porque no ha preescrito. En materia de juicio político debemos considerar dos tipos de competencias: La federal, que se aplica en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la local que aplican en los Estados de la federación en el ámbito de su competencia en los términos que establecen las propias constituciones locales. Así, en primer lugar debemos tener en cuenta que el artículo 108 de la Constitución Federal, en su último párrafo, le otorga competencia a las entidades federativas para legislar en materia de responsabilidades en general, políticas, penales y administrativas, en que puede incurrir un servidor público en el ejercicio de su encargo, facultando a las legislaturas locales para que decidan de manera soberana quiénes serán sujetos de responsabilidades oficiales. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. De tal suerte, es claro que existe una facultad exclusiva en los Estados para legislar en materia de responsabilidades en el ámbito de la competencia local, la cual le deviene no de una reserva que se haga en los términos del artículo 124 de la Constitución General, sino porque ésta expresamente así lo establece. Ahora bien, el artículo 109 de la misma Constitución General, donde se sientan las bases y principios sobre los cuales la federación y los Estados deben legislar en materia de responsabilidades, tanto políticas como penales y administrativas, señala lo siguiente: Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidad de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones

de la misma naturaleza. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. Como se ve, en las prevenciones que se hacen en la Constitución Mexicana en cuanto a las bases que deben observarse para el caso de juicio político, concretamente de acuerdo con lo preceptuado por la fracción I y por los párrafos segundo y último, nunca se menciona que, en el caso de los Estados al regular la materia de juicio político que a su jurisdicción local compete, la imposición de las sanciones derivadas de este tipo de juicios deba aplicarse dentro de plazo alguno. Lo anterior es constitucional y jurídicamente entendible, considerando que, en el ámbito estatal, cada Constitución local y su respectiva ley regularan todos los aspectos relativos al juicio político que compete a las propias entidades federativas. Ahora bien, el artículo 114 de la Constitución Mexicana establece las disposiciones relativas a los términos y plazos que deberán observarse para la instauración de procedimientos de responsabilidades, así como para la imposición de sanciones y, en lo que a responsabilidades y sanciones en materia de juicio político corresponde, establece: el Artículo 114.- “El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”. En una primera apreciación pareciera que éste es un principio que debe ser observado por todo el orden jurídico nacional, esto es, por las leyes federales y de los Estados, incluyendo las constituciones de estos últimos; sin embargo, de una interpretación correcta de tal precepto, correlacionado con los similares 108 y 109 ya analizados, se tiene la certeza de que tales principios y disposiciones solo aplican a la materia de juicio político en la competencia del orden federal, ya que, si se quisiera que tal mandato aplicara a los juicios políticos que son competencia de los Estados, la misma Constitución así lo expresaría, atendiendo al sistema de distribución de facultades que se establece en el artículo 124 de la Ley Suprema. En conclusión, si en el artículo 109 de la Constitución General de la República que establece las prevenciones que deben observar las leyes de los Estados al regular sobre los juicios políticos que instauran en el ámbito de su competencia, y el artículo 114 de la misma Constitución no señala de manera expresa que tales disposiciones serán aplicables por los Estados en los juicios políticos que les competen, es claro que tal facultad para establecer las condiciones procedimentales, los términos y plazos para la instauración del procedimiento y aplicación de sanciones, es una facultad exclusiva de la propia entidad federativa. 3.- En el caso de nuestro Estado de Colima, el artículo 126 de la Constitución Local, al regular los tiempos a que está sujeto el juicio político, señala lo siguiente: “Artículo 126.- La responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o empleados públicos que gocen de fuero Constitucional, sólo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. En cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas generales de la prescripción”. Como se ve, la Constitución de Colima al establecer las bases en cuanto al término para el juicio político, solo señala plazo en cuanto al inicio del mismo, sujetando la denuncia respectiva al tiempo en que está en funciones el servidor denunciado o bien, dentro del año de que concluyó su encargo. En otras palabras, el plazo que establece es solo para iniciar el

procedimiento pero no para terminarlo ni para imponer sanciones. Ahora bien, la pregunta sería ¿En caso de que el Congreso haya excedido el plazo para concluir el procedimiento, es motivo para que ya no se pueda sancionar al servidor público a quien se le siguió un juicio político por denuncia ciudadana? La respuesta es un rotundo NO. El Hecho de que el juicio político tenga más de noventa días de iniciado, incluyendo una prórroga, no es motivo suficiente para determinar que ya no es factible imponer sanción alguna. Lo anterior es así, porque el artículo 19 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es una disposición de orden procedimental, esto es, de carácter adjetiva, no sustantiva y, por lo tanto, para su inaplicabilidad está sujeta a las reglas de la preclusión o caducidad; esto es, ahí se contiene un termino procesal para que el Congreso del Estado ejerza una facultad, la de instruir el procedimiento y emitir sus conclusiones, y si se quisiera que el Congreso perdiera dicha facultas por el mero transcurso del tiempo o por no haberla ejercido dentro del plazo que le señala la Ley, la misma disposición, esto es, el propio artículo 19, así lo establecería de manera expresa. En conclusión, el hecho de que el Congreso no ejerza la facultad que tiene dentro del plazo que procedimentalmente se le señala en la Ley, no es motivo para que tal facultad le precluya o para que la misma caduque, a menos que así lo establezca de manera expresa la propia Ley y, en el caso de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Colima, en ninguna parte se establece ni la institución de la caducidad de la instancia ni de la preclusión de derechos. Conclusión En virtud de que el juicio político en contra de los Regidores se inicio en el plazo en que ellos estaban en funciones, se cumplió con el requisito de tiempo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Colima y, aún cuando ya haya transcurrido en exceso el término para que el Congreso se erija en jurado de acusación, no le ha caducado ni precluido el derecho a hacerlo porque la Ley no señala como pena tal situación para el caso de no actuar dentro del término que les fija la Ley, esto es, para instruir y concluir el procedimiento. No se puede aplicar la disposición contenida en el artículo 114 de la Constitución General de la República, porque tal precepto se aplica en materia de juicio político únicamente a la competencia federal, ya que, en el caso de los Estados, éstos se rigen por lo que establecen las Legislaturas locales en sus Constituciones y Leyes. Por lo tanto, considero y solicito se vote a favor, ya que no podríamos ser tan irresponsables de permitir que un Cabildo, solamente por el hecho de que uno de sus miembros, este en desacuerdo con quien lleva la más grande responsabilidad al frente, como es el Presidente Municipal, tenga que aplicar una sanción, por el simple hecho de tener mayoría en el Cabildo, cuando ninguna facultad tienen para destituirles por el simple hecho de que fueron elector por el pueblo y el pueblo esta representado por este H. Congreso, y las facultades del pueblo representadas aquí, tendrán que hacerse valer de acuerdo a la ley. En ningún momento por situaciones de sentimiento o pareciera que cualquier fracción o elemento que no tengan mayoría estaría en desventaja. Yo quiero nada más recordar un pequeño acontecimiento que se vivió cuando por ahí quisieron tomar la decisión de quitarle la coordinación a alguien que representaba una minoría dentro del Congreso. Es cuanto Diputada Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar.

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Muy distinguidos ciudadanos y ciudadanas que nos distinguen con su presencia. Quiero hacer uso de

la palabra y referirme al asunto que nos mantiene en este debate, pero no sin antes manifestarles mi más profundo respeto total, incondicional, a quienes piensan de una manera y quienes pensamos de otra forma, respecto al punto de controversia. Una vez aclarado esto pues, espero que no lo llevemos con encono ni mucho menos con diatriba a ninguna de las partes. Todos sabemos compañeros, que estamos por lógica y por disposición de la voluntad de todos los ciudadanos de todas las épocas que estamos sujetos a disposición de la norma, a disposición de la ley, en todos los niveles, bueno hablando de niveles también sabemos que hay niveles, por lo menos tres instancias, tres niveles, y para el caso de gobierno o servidores públicos, pues hay el nivel municipal, el nivel estatal y el nivel federal. Como en todo, hay principios o reglas, que por la simple analogía o por sentido común se dan por hecho o se aceptan, inclusive como parte del propio derecho. Y una de ellas, establece que quien puede lo más puede lo menos y cito esto porque obviamente no es válido argumentar que tenemos una Constitución específica o alguna ley específica y por ende, cumpliendo con ella, pues no sería importante si coincide o se cumple con la ley suprema o la ley fundamental. Nuestros ordenamientos establecen claramente que todo debe de estar concatenado, debe de estar coordinado y la ley fundamental la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esta por encima de todo, las personas y las instituciones y esta es la que nos rige por parejo a todos. De ahí que, pues aquí estamos ante una serie de interpretaciones que respetuosamente cada quien emite o toma, pero en Acción Nacional, desde hace pues ya años que se inicio esta controversia de este asunto, no quisimos y hemos querido porque no lo vimos necesario entrar al fondo del asunto, es decir, nosotros no estamos juzgando ni opinando si son realmente responsables los miembros del Cabildo que ahora se pretende sancionar o proponer sanción y tampoco estamos apasionadamente defendiendo su inocencia, simplemente desde un principio que notamos y lo hicimos notar a nuestras contrapartes, es decir, a los Diputados que opinan diferente a nosotros, a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y algunos otros tal vez, les hemos hecho notar y hemos pedido respetuosamente que nos sujetemos a la interpretación mayormente, diríamos correcta, aquí el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, citaba, que una interpretación correcta de la ley, colegimos y decimos y creemos que procede esto, bueno, todos creemos en un momento dado que tenemos la interpretación correcta de la ley; diario, constantemente nos damos cuenta de que es incierta esa postura, todo.....C.D.C..... nos enteramos, acabamos de saber que de dos tribunales federales, consideraron responsable, penalmente responsable a Raúl Salinas y ahora un tercer tribunal lo considera absuelto que no es responsable y es importante citar ya valiéndonos del ejemplo que esto no es cosa del Ejecutivo he, porque luego mucha gente le hecha la culpa al ejecutivo, al gobierno del cambio ya concedió libertad a un presunto delincuente, no compañeros, este es el Poder Legislativo, perdón Poder Judicial, que dentro de sus jerarquías, en el tercer, en su tercera oportunidad, considera que este ciudadano no es responsable y resulta absuelto, no, bueno, imagínense en la precariedad que nos encontramos nosotros, nosotros estamos discutiendo algo, pero ni siquiera los panistas hemos entrado respetuosamente a dirimir o a opinar si realmente hay un agravio, hay un ofendido y hay un responsable. Hemos querido empezar por el orden, vámonos sujetando a la ley porque aquí se establece que hay una Cabildo que no se sujetó a la ley, que ejerció funciones impropias que no le competen y por ende, si queremos ser y estamos erigidos en Jurado de Acusación, estamos, se esta proponiendo por la Comisión dictaminadora, la Comisión de Responsabilidades, esta proponiendo se imponga sanción, pero nosotros, desde un principio cuando vimos las cosas desfasadas en el tiempo y yéndonos a la ley fundamental, finalmente pues para que hacer las cosas más complejas, es una realidad, estamos llenos de leyes, que la mayoría no se

cumplen o no los cumplimos muchos, en algunas formas y en algunos aspectos, y luego terminamos por si quiera no cumplir ni siquiera con las formas, los tiempos. Pero esto significa ciudadanos no que estemos peleando o argumentando a favor de la impunidad, de ninguna manera que quede claro, en Acción Nacional, no solapamos ni estamos de acuerdo con la impunidad, estamos de acuerdo en que si todos aceptamos estar bajo un régimen de derecho, pues nos sujetemos simple y sencillamente a ese régimen de derecho. Entonces pues, sin prejuzgar, la responsabilidad o no del Cabildo, o el agravio, la existencia del agravio o no del presunto ofendido, nosotros hemos sostenido y seguimos sosteniendo por razones que no va al caso citar, simple y sencillamente no se actuó conforme a los tiempos, a los plazos que la propia norma nos establece. Y dicho de otra manera, bueno, pues se incumplió también y no es válido compañeros, se imaginan que anarquía si queremos aplicar la ley, exigir que se apliquen sanciones para una institución o personas presuntas responsables, queremos hacerlo, pero lo vamos a hacer a la vez de forma violatoria de la ley, es decir, violamos otras leyes para aplicarles la ley a otros. La verdad es que resulta pues obviamente incongruente, inadmisibile y por supuesto que en Acción Nacional no compartimos esos criterios y siempre lucharemos por la aplicación irrestricta de la ley, resulte quien resulte responsable, pero cumpliendo el mandato al que todos estábamos obligados. Aquí ya se mencionaron algunos, de hecho el dictamen cita varios preceptos legales, desde el menor como sería la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, hasta la propia Ley Fundamental, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí de ese extremo a extremo encontramos un puño de leyes, que luego por hacer, por querer ser tan jurisconsultos, terminamos por no cumplir nosotros la propia ley. Nosotros llamamos por supuesto a la aplicación de la ley, pero a la cordura, a ver fríamente pero con pasión, ciertamente, con celo, que quien incumpla la norma, se le aplique lo que la misma norma establece. Pero nosotros fundamentalmente nosotros, sujetándonos a la ley, no puede ser lógico ni por sentido común ni tampoco ético, ni moral, ni mucho menos legal que nosotros vayamos a pisotear la ley, en aras de buscar aplicar la propia Ley, por eso hacemos un llamado, obviamente con mucho respeto a nuestros compañeros Diputados que piensan la procedencia de esta propuesta de fijar esta sanción para los miembros del Cabildo que multicitadamente conocemos aquí. Y apelamos el sentido común a que este Congreso tome procedimiento o tome formas de procedimiento más expeditos, más pronto, más puntuales, porque de otra manera no solamente seguiremos agraviando a quien acude en búsqueda de la aplicación de ley, si no que afectaremos de muchas formas a la sociedad que pretendemos representar y que con tanta confianza nos ha traído a esta representación. Es cuanto.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jubal Ayala Jiménez.

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente que nos acompaña el día de hoy. Obligadamente acudo a esta tribuna para fijar mi posicionamiento con respecto a este añejo asunto, y decirles que por mi parte, en todo momento, estuve consultando la asesoría jurídica para emitir mi punto de vista y emitir mi voto sobre este asunto en particular. Por ello, quiero decirles que mi posicionamiento

en este momento se traduce en lo siguiente: La sociedad colimense, ha sido durante los últimos años testigo de graves presuntos actos de corrupción que han sido desde los que van de comprometer recursos públicos en campañas electorales, aumentarse percepciones en los cabildos, hasta adoptar funciones metaconstitucionales. Estas malas acciones de los servidores públicos han deteriorado la calidad de la función pública en el Estado de Colima, comprometido las instituciones y mandado mensajes de anarquía e irresponsabilidad al resto de la sociedad. Y lo más peor, que el poder legislativo sale también afectado por no actuar con oportunidad cuando en apego a sus funciones, tenga que hacerlo ante hechos de esa naturaleza que llegan hasta aquí, sancionando o deslindando responsabilidades. Para llegar a consolidar nuestras instituciones públicas, en este caso el régimen municipal, pasaron siglos de lucha en la historia. El municipio fue una herencia del imperio romano. Con esta institución empezaba la cultura republicana, y con ella se empezaba a hablar de representación popular, mucho antes de que, producto de los revolucionarios de la Ilustración, surgieran los derechos universales del hombre, y con ellos también la democracia republicana. Ninguna acción, en la vida política moderna, debe justificar a quienes debiendo honrar esta que es la institución más cercana al pueblo, la pongan en entredicho con su mal proceder. Esta Honorable Asamblea está instalada en jurado de acusación, precisamente para actuar contra quienes se extralimitaron en las funciones que el pueblo les confirió a los representantes populares. La sociedad clama por justicia, por la aplicación de la ley contra quienes violan el pacto social, es decir, la Constitución. Nadie debe ser tolerado cuando debiendo apegarse estrictamente a la ley, anteponga intereses particulares o facciosos al deber de cumplir con el encargo que la voluntad de los ciudadanos les confiera. Una institución, como el municipio, no es una hacienda o una empresa personal o de grupo, para que los patrones o los cabecillas decidan a quien quitar de su labor; en el caso de un Ayuntamiento es el pueblo el que decide con su voto a cuales regidores quiere para el Cabildo, y su determinación está consagrada y protegida por las leyes ante tentativas dictatoriales o autoritarias. Hoy este Honorable Congreso va actuar, y hay que decirlo que fui de los primeros que expresaron que nadie debe estar por encima de lo que marcan las leyes; votaré sin que me tiemble la mano y con la serenidad y la firmeza que requiere la responsabilidad del ejercicio legislativo. No caímos nunca en negociaciones oscuras que privilegiaran conveniencias políticas por encima del cumplimiento de la Ley. Es lamentable que hasta ahora haya sido liberado este dictamen. Más de dos años han pasado, durante los cuales este evento se politizó y eso impidió que se aplicara la ley con oportunidad. Qué ironía, cuando sabemos que la aplicación de la ley debe ser expedita. Los recursos públicos, la función pública, el respeto y la aplicación de la ley no deben estar sujetos a negociaciones facciosas. La ley no es una patente de corso para que arbitrariamente la utilicen los representantes populares, en forma facciosa o individual. Lo peor que puede ocurrir para el combate a la corrupción y la ineficiencia administrativa, es que hagamos nuestro trabajo legislativo, de aplicación de la ley, de fiscalización, sin rigor y sujeto a los vaivenes y las circunstancias políticas, es decir, dándole largas al asunto para mientras sacar provecho o negociar otras acciones u obligaciones del legislativo. Nada de lo que ocurra allá afuera en el ámbito político, debe ser tan importante como para que los legisladores rehuyan a cumplir en tiempo y forma con la función de fiscalizar los recursos públicos, editar leyes, llevar a cabo gestiones o actuar como jurado para hacer respetar las leyes. Si hay ineficiencia, incapacidad, corrupción, malos manejos, poca claridad en el gasto, y si estas acciones son cometidas por gobiernos del equis o ye partido, o por representantes populares que no miden las consecuencias de sus actos, y que con ellos lesionan la vida institucional; se debe castigar o sancionar con estricto apego a la ley. Nuestro partido, ha venido señalando con toda fuerza y vigor crítico su rechazo a los ajustes y

acomodos que podrían darse con respecto al asunto, añejo también, del targetagate y con respecto a las sanciones a los regidores panistas que se extralimitaron en sus funciones. Por esa crítica fuimos receptores de acciones de intolerancia política, Porque habíamos denunciado que se negociaba con los expedientes; por manifestar que estamos en contra de la negociación política que afecte el ejercicio transparente del servicio público y la correcta aplicación de la Ley, nos llovió la crítica de quienes hicieron que este juicio de los exregidores se alargara tanto y que, hay que decirlo, puede correr el riesgo de que la sanción sea sólo de tipo moral y no legal, debido a que no se actuó con oportunidad. Que se trata de sentar un precedente, se ha dicho; para que no ocurra en el futuro algo similar, es decir, que representantes populares extralimiten sus responsabilidades. Hay que reflexionar sobre este asunto y el riesgo que se corre de no lograr los fines que estamos tratando aquí: sancionar el abuso de autoridad. Y ver que ha sido un error alargar por tanto tiempo un asunto tan lesivo de la vida municipal, de la función pública, del gobierno, del respeto a la ley. En todo caso, si la misma Ley, luego de liberado este dictamen en el Congreso, llegara a absolverlos de la sanción, no obstante que el delito existió en su tiempo, la culpa sería, hay que decirlo con toda claridad, no de un servidor, sino de otros. Ya se ha leído el dictamen respectivo, y es claro que existe culpabilidad. Y eso es muy grave cuando de funcionarios públicos se trata, cuando quienes los cometen son los representantes populares, en este caso de quienes representan al pueblo en uno de sus primeros ámbitos: el municipio. La resolución que hoy emite este H. Congreso es histórica, porque además de imponer sanciones a quienes incurrieron en acciones lesivas del estado de derecho -creyendo que actuaban precisamente aplicando la ley, pero que en realidad atropellaron la función pública-, constituye, en el ámbito local, un saludable precedente de aplicación rigurosa de la ley contra quienes la violenten desde la función pública. Como diputado, como lo he demostrado antes aquí, no voy a permitir que quienes debiendo honrar las instituciones, las perviertan y corrompan con su mal proceder. Pero también hago un llamado a la comunidad crítica colimense, para que después de esta sanción, conozcan las causas y las razones de tanta demora para actuar y que no es otra más que también la extraviada forma de concebir el trabajo legislativo como una mesa de acuerdos para dar salida a contubernios y complicidades políticas. Porque saben que no tienen ni la capacidad ni el respaldo social para sacar acuerdos democráticos y de cara a la sociedad colimense. Por eso han puesto de acuerdo a oscuras para aprobar algunas cuentas públicas, cambiado a su gusto y modo funcionarios de importantes organismos institucionales de la vida democrática, laboral y los derechos humanos de los colimenses. El delito en que incurrieron los ciudadanos exregidores del H. Ayuntamiento de Colima, es tangible, concreto, elocuente. Pedir que se dispense la sanción de una acción tan clara de arbitrariedad en el ejercicio municipal, es imposible. La aplicación de la ley no debe estar sujeta a negociaciones ni mover a crisis de conciencia a quienes la aplican ante hechos consumados como el que nos ocupa. Este precedente es sumamente importante para evitar los abusos de poder. Es importante sancionar esta mala conducta, porque de no hacerlo, sería un atractivo para que esos intereses facciosos o personalistas caigan en la tentación de quitar del camino a servidores públicos que emanan de procesos electorales constitucionales. Es cuanto ciudadana Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Margarita Ramírez Sánchez.

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Señora Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado. Presente. La que suscribe, Diputada Margarita Ramírez Sánchez, Secretaria de la Comisión de Responsabilidades, a la que le correspondió conocer del expediente formado con motivo del Juicio Político instaurado por Denuncia popular presentada por el ciudadano Fidel Alcaraz Checa, en contra de los ciudadanos JOAQUIN ALVAREZ NERI, JULIAN FAJARDO BENANCIO, RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA, MA. ESTER OCHOA ESPIRITU, GONZALO MENDEZ ORTEGA ROBERTOHUERTA DUARTE, MA. TERESA MARQUEZ GOMEZY MA. DEL ROCIO SANDOVAL MENDOZA, que integraron el Honorable Ayuntamiento de Calima en el periodo Constitucional 2000-2003 y como integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen Resolución que presentan la mayoría de los integrantes de la misma, con fundamento en el artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo expreso mi VOTO PARTICULAR en los siguientes términos: Considerando: PRIMERO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 126 señala que: "La responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios y empleados públicos que gocen de fuero constitucional, solo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. En cuanto a los delitos comunes se observaran las reglas generales de la prescripción." El artículo 9 de la Ley estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que "El juicio Político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión o dentro de un año después de la conclusión de sus funciones". Ambas normatividades coinciden de manera clara y contundente en que el Juicio Político por faltas oficiales solo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión o dentro de un año después de la conclusión de sus funciones, sin embargo omiten señalar el plazo en que podrá aplicarse la sanción a estos servidores públicos por tales acciones u omisiones. SEGUNDO.- Mediante fecha 17 de Mayo del año 2002 la Comisión de Responsabilidades de esta Soberanía determino incoar el procedimiento de juicio político derivado de la denuncia popular presentada por el Ciudadano FIDEL ALCARAZ CHECA, en contra de los ciudadanos JOAQUIN ALVAREZ NERI, JULIAN FAJAR DO BENANCIO, RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA, MA. ESTER OCHOA ESPIRITU, GONZALO MENDEZ ORTEGA ROBERTOHUERTA DUARTE, MA. TERESA MARQUEZ GOMEZY MA. DEL ROCIO SANDOVAL MENDOZA, que integraron el Honorable Ayuntamiento de Colima en el periodo Constitucional 2000-2003. TERCERO: Por su parte la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 114 señala que: "El procedimiento de Juicio Político solo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor publico desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las Sanciones correspondientes se aplicaran en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento" Por lo que la actuación de nosotros como miembros de la comisión de responsabilidad no podrá ir mas haya de lo que dispone la Constitución Federal ya que permitir imponer una sanción a los servidores públicos en cuestión cuando ya ha prescrito el plazo seria ir más allá de lo que la misma ley nos permite. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el Voto Particular, del siguiente Dictamen:.. Decreto Numero.- ARTICULO PRIMERO: Que conforme al artículo 114 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos ya no pueden ser sancionados, por tanto, ya no hay razón para continuar con el enjuiciamiento. Toda vez que la propia constitución Federal termino por agotar los plazos e imposibilitar cualquier tipo de sanción a estas fechas ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez aprobado el presente dictamen resolución archívese el mismo como asunto totalmente concluido para los efectos legales correspondientes. Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col. 14 de junio de 2005. Margarita Ramírez Sánchez, Diputada Secretaría de la Comisión de Responsabilidades. Es cuanto.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. La Comisión de Responsabilidades como ha quedado asentado en las propias conclusiones que somete a la consideración del pleno cameral, erigido en Jurado de Acusación, tuvo a bien emitir sus conclusiones el día 4 de mayo de 2004, con sentido de oportunidad y responsabilidad, se les hizo llegar la propuesta de dictamen a cada uno de los integrantes de la Comisión desde el día 1º de abril de ese mismo año. Tuvimos más de un mes el dictamen conclusión para su análisis, deliberación y votación. En la sesión de trabajo convocada por la Comisión el día 4 de mayo de 2004, la ciudadana Diputada Margarita Ramírez Sánchez, simplemente no emitió voto a favor ni en contra del documento que nos ocupa. Sin embargo, hoy, se presenta ante este pleno cameral con un voto particular que respetamos pero que no compartimos. Y tampoco compartimos los criterios y las apreciaciones de que estamos corriendo riesgo de que no se aplique la responsabilidad a los exmunicipes del Ayuntamiento de Colima. Nosotros sostenemos el criterio de que esta Soberanía atento a lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, esta actuando de manera oportuna en tiempo y forma para resolver lo que conforme a derecho proceda. Hemos coincidido la gran mayoría aquí de que existe responsabilidad y amerita sanción la conducta denunciada de los exmunicipes del Ayuntamiento de Colima, y nosotros la fracción del Partido Revolucionario Institucional, sostenemos que estamos actuando apegados a la legalidad, que no aplica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de prescripción que se alega, porque nuestra Constitución como ya lo señaló nuestro amigo el Diputado Héctor Bautista Vázquez, el término de uno año después de concluido el ejercicio para el mandato que fue electo o designado el funcionario, para ser sometido a juicio político, es decir, para iniciar el procedimiento de juicio político, más no, establece un término perentorio para que esta Soberanía emita la resolución que conforme a derecho proceda. A mayor abundamiento, decirles que no es la primera vez que se combatiría una determinación de esta Soberanía y que en todas las ocasiones que han sido combatidas determinaciones de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, por parte de diferentes compañeros de las fracciones legislativas aquí representados, han sido confirmadas las resoluciones por los tribunales federales, y en el caso que nos ocupa, nuevamente así será. Así será, porque este debidamente reglamentado el procedimiento de juicio político que debe de instaurarse al Gobernador,C.D.C..... a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, a los Consejeros del Instituto Electoral del Estado, a los comisionados de derechos humanos y a los Secretarios del Despacho. Por tanto, sostenemos el criterio de que no opera la prescripción y estamos en tiempo y forma para que este Congreso del Estado, erigido en Jurado de Acusación proponga que imponga la sanción de siete años de inhabilitación por la conducta atribuible de atribución de usurpación de funciones a los exmunicipes del Ayuntamiento de Colima, período 2000-2003. Es cuanto Diputada Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. El contexto del asunto que hoy nos ocupa, creo que ampliamente todos lo conocemos, se ha leído el dictamen resolución por parte del Diputado José Luis Aguirre Campos, así es que me referiré a las cuestiones de procedencia del dictamen. Tenemos que partir del día 17 de mayo, se acordó por parte de la Comisión de Responsabilidades, del Congreso iniciar el procedimiento de los exregidores del Ayuntamiento de Colima del período 2002-2003 y para llegar al dictamen resolución que se presenta el día de hoy, la ley orgánica del propio Congreso del Estado, su Reglamento y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, establecen específicamente el procedimiento, el término, los plazos durante los cuales se deben de desahogar este procedimiento, es decir, va diciendo en que términos se deben ofrecer las pruebas, los alegatos como un juicio que llevamos en materia penal o civil. Sin embargo, violando estas disposiciones que establece esta Legislación y específicamente señalan en que plazos se deben de desahogar un procedimiento de juicio político, es que la Comisión no resolvió en tiempo el asunto que le fue turnado, como hay muchos asuntos en varias comisiones en el Congreso, que bueno se establece se debe de resolver en 30 días, y que si bien pues no se resuelven en el plazo, pero finalmente es una violación a la propia legislación del Estado. Y finalmente pues entendemos que la ley esta hecha para cumplirse y más por quienes tenemos esta representación aquí en el Estado. Se ha hablado de los artículos 108, 109 y 114, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para argumentar que la Constitución federal, que las resoluciones de esta Asamblea, que esta Asamblea no esta obligada a sujetar sus resoluciones en cuestión del plazo a la Constitución federal. El artículo 108 nos dice quienes son sujetos de Juicio Político, el 109, da facultades a los estados, para expedir leyes para normar, para sancionar, para expedir normas y sancionar la responsabilidad. Y se habla de una interpretación correcta, una interpretación correcta, bueno ¿en manos de quien? Se dice que el artículo 126 de la Constitución local, no establece un plazo y que bueno en virtud de ello, no podemos atender a lo que establece la Constitución federal. Efectivamente el artículo 126 de la Constitución local, no establece un plazo dentro del cual se deba resolver un asunto de juicio político, pero el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también es una norma fundamental en México y que también rige el Estado de Colima si nos establece un plazo, y bueno ahí señala específicamente como ya se ha leído ampliamente el procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe el cargo y dentro de un año después, y señala que las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. Entonces, señala aquí ya un término, da un plazo de un año. El artículo 41 de la Constitución, también establece “el pueblo ejercer su soberanía por medio de los poderes, en los casos de la competencia de éstos y por la de los estados, en los que toca de sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares del Estado, en las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”. Por lo cual podemos deducir que la Constitución Federal si nos obliga y que si debemos revisar, si debemos respetar como norma máxima la Constitución federal. Además de esto, debemos entender que aquí se ha estado hablando nada más de la parte que interpone el recurso, el juicio político, pero en ningún momento se ha hablado de la otra parte, ¿dónde queda la seguridad jurídica, el derecho a la seguridad jurídica de los que han sido sujetos de este proceso?, porque si bien, aún cuando son sujetos de un proceso, también tienen derecho, entonces aquí se ha olvidado esta parte, yo creo que es algo que debemos considerar y también bueno, dentro del dictamen que habla dentro de la conclusión

número tres del dictamen resolución se habla de que a partir de que se imponga la sanción por parte del Supremo Tribunal de Justicia, es a partir de cuando empezará a contar el plazo para la inhabilitación, yo creo que cualquier que es sujeto de un juicio, hablemos de un juicio del orden penal, civil, pues todos deseamos que el asunto se resuelva y que haya un plazo, no lo pueden dejar indefinidamente en un asunto tres, cuatro, cinco seis años, el tiempo que se le antoje a la Comisión o el órgano que va a definir, ¿en que situación estamos? Podemos participar en un proceso electoral, no podemos participar, imagínense una persona sujeta a un juicio penal, ¿qué va a pasar?, ¿se va a quedar ahí hasta que los cuatro o cinco años les resuelvan? Yo creo que no, tenemos derecho a la seguridad jurídica, a que se establezca un plazo dentro del cual nos deben resolver, no podemos quedar en la incertidumbre, como ha pasado con otros tantos asuntos y resulta ser que también casualmente, siempre en estos asuntos son asuntos de la oposición con mayoría priísta en el Congreso. Tenemos el asunto de Martha Sosa, que decía el Diputado que me antecedió en la palabra que no había ningún asunto que se había resuelto en contra del Congreso, pues tenemos el asunto de la inhabilitación de Marta Sosa que todavía no se resuelve en los tribunales, todavía no se resuelve pero si bien no es un asunto que esta por inhabilitación. Esta el asunto también de Raymundo González, que también fue desaforado por este Congreso. Entonces, si hay asuntos en los que se deja la incertidumbre y que paso específicamente en el asunto de Martha Sosa, pues se dejaron el procedimiento hasta que un día, unos días antes de que se pudiera registrar y participar se resolvió, se resuelve su inhabilitación, entonces quiere decir que se manejan de determinada forma los asuntos. Entonces, O sea, aquí hablemos de la seguridad jurídica que tienen quienes están en un procedimiento de que se les resuelve en tiempo y forma, porque no los podemos tener ahí, hasta que se le antoje a la Comisión, o hasta que bueno haya intereses o se pueda resolver en el momento que convenga. Es un asunto que debemos considerar. La imparcialidad del juzgador es un derecho de los acusados, que es precisamente de lo que estamos hablando, cuando los responsables de juzgar a una persona, actúa de manera tendenciosa o partidista, se vulnera el principio básico de la seguridad jurídica, que debe imperar en todo estado de derecho. La ilegalidad debe castigarse mediante la aplicación de las normas jurídicas, con apego a los procedimientos del caso y siempre teniendo en cuenta que el principal valor a salvaguardar, son las garantías jurídicas de los involucrados, hablamos de garantías jurídicas tanto de la parte que se esta juzgando como de la parte que se tiene que defender, ambos tienen garantías jurídicas en un proceso. Los deseos, preferencias, odios o intereses personales de los juzgadores, deben ser cancelados e ignorados cuando se instaura un procedimiento legal en contra de una persona. Sin importar de quien se trate, de lo contrario, la verdad legal se convierte en un asunto de preferencias e intereses individuales o de grupos y se pervierte la vigencia del imperio de la ley, “convertir la ley en un asunto de facciones, es condenar a la muerte al principio de la legalidad”. En este caso tenemos que pues el juicio político no sería un juicio de los ciudadanos, que son los titulares del poder político y en este sentido tendrían el derecho a decidir, bueno si nombraron a alguien, pues a quitarlo del cargo, en este caso, el juicio político pues sería llevado a cabo por un grupo de políticos con intereses muy específicos, porque también hay que entender que la acusación tan amplia como que redunde en perjuicio de los intereses públicos, permite casi cualquier acto u omisión que justifique un juicio político. Así, cualquier partido, cualquier alianza de partidos, o cualquier persona que controle la mayoría suficiente en la Cámara podrán eliminar del panorama político a los opositores a quienes consideren enemigos, destituyéndolos o inhabilitándolos para ocupar cualquier otro cargo porque les incomoda al grupo o a la alianza dominante, de esta manera, se acaba rápidamente la disidencia, la competencia política y se implanta la dictadura. En este sentido tenemos que el día de hoy, se

pretende imponer por parte del PRI, a un excabildo panista, no es otra cosa que una venganza contra el partido que le ha arrebatado la fuerza de los votos y con los buenos resultados de gobierno a más de la población del estado, a nadie engañan los priistas, la justicia no se hace con mayorías, al pretender sancionar a los exfuncionarios públicos municipales, aún habiendo preescritos las faltas que se imputan, se violenta no solo la ley sino el ánimo de cooperación y construcción de acuerdos, que en el Congreso debe prevalecer y se tira por la borda la palabra empeñada por el Ejecutivo estatal, de trabajar en armonía y buscando los consensos necesarios en los verdaderos temas de interés del estado. Yo creo que aquí el tema central, como ya lo comentaba, es la seguridad jurídica que debe tener todo procesado en un juicio y en este caso no se esta respetando si hemos escuchado detenidamente las intervenciones de quienes han abogado porque se vote en contra este dictamen resolución; nunca han hecho referencia a los derechos que tienen los involucrados en este procedimiento, los que son sujetos a juicio político. Entonces yo creo que es un asunto que se debe de analizar y que se debe de ver que si hay competencia por parte de la Constitución federal, en este tema, que no se quiera ver es otra cosa. Es cuanto Diputada Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Florencio Llamas Acosta.....INTERVENCIONES DESDE CURULES..... Sí, así lo dice el artículo 156, así lo dice que tienen derecho a hacer uso de la voz. En el artículo 156..... INTERVENCIONES DE CURUL. El Diputado tiene derecho a hacer uso de la palabra, podrá hacerlo para rectificar hechos, formular interpelaciones y para contestarlas siempre que se le dirijan. En estos casos, se limitará a expresar con precisión, sencillez y brevedad, los hechos o interpelaciones que desee formular sin entrar en disertación alguna y cuando se le formule una interpelación, se limitará a contestar los puntos sobre los que se le hubiere interpelado. Se concede la moción. Se concede un receso.....RECESO..... Se le concede la voz, al Diputado Martín Flores Castañeda.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. La moción de procedimiento que se le solicita, Diputada Presidenta, es para el efecto de que se abra una segunda ronda de discusión. Se le solicita muy atentamente se abra la segunda ronda de discusión. Gracias.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Aceptada la petición, se abre una segunda ronda ¿quién desea hacer uso de la palabra?, a favor y en contra. Se le concede el uso de la voz al Diputado Florencio Llamas Acosta.

DIP. LLAMÁS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Pueblo de Colima. Queda debidamente acreditado con el dictamen que presenta la Comisión de Responsabilidades, que los inculpados si incurrieron en el acto de usurpación de atribuciones al decidir suspender en sus funciones al Síndico municipal, contraviniendo el artículo 115 de la Constitución Federal, 87 fracción I de la Constitución del Estado. Por tanto, observamos aquí que quienes han votado o han manifestado su participación en contra del dictamen, no han argumentado la inexistencia de la falta. Por lo tanto, reconocen la existencia de la falta en la usurpación de atribuciones. Segundo.- Ha quedado ampliamente acreditado que el procedimiento de juicio político ha estado apegado a derecho. Que no ha prescrito. Que no ha caducado. Que esta vigente. Y que los argumentos de que ya no es tiempo, son argumentos débiles, que evidencian efectivamente la falta de respeto al estado de derecho y a la soberanía popular. Argumentos como que es venganza, ahora resulta que aplicar la ley, es venganza. Ahora resulta

que quienes defienden la impunidad se defienden con la capa de la objetividad y que aplican el marco jurídico y hacen respetar el estado de derecho, se les acusa de posiciones partidistas. Invito a la opinión pública y a la sociedad colimense, a que estén atentos a la argumentación, porque es lamentable que haya Diputados que estén a favor de la impunidad, porque simplemente son sus compañeros de partido. Es lamentable que se busque salir por la tangente con argumentos como ese de que ya está desfasado en el tiempo y más lamentable es que solapen un comportamiento que se atribuyeron los munícipes al inhabilitar al Síndico que llegó al cargo por mandato popular. Aquí es importante destacar que los regidores inculcados doblemente usurparon atribuciones. Primero, al revocar un mandato popular que los electores colimenses les dieron en su confianza y en su voto al Síndico. Segundo.- Al sancionar, al suspender de sus funciones al Síndico que el pueblo, y el municipio de Colima, le concedió. Que quede esto claramente señalado. Doble es entonces las atribuciones que no tienen y que ellos se abrogaron, revocar el mandato que el pueblo jamás les confirió para que ellos tuvieran esa facultad. Y como ha quedado aquí acreditado, no tienen tampoco facultades para inhabilitar a ningún munícipe. Quiero cerrar esta intervención con una reflexión que hace en sus diálogos el filósofo griego Platón, cuando dice “El peor de los males de la sociedad es -precisamente- la impunidad”, es cuanto Diputada.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno.

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputada Presidente. Obviamente este es un tema que despierta muchas pasiones, quienes participamos en la administración pública, deberíamos de conocer un principio fundamental, como ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, pero como servidores públicos, solamente podemos hacer aquello que la ley nos facultad para hacerlo. Es un principio fundamental. En el caso de los integrantes del Cabildo, del Ayuntamiento de Colima, para el período 2000-2003, al suspender de sus funciones al entonces Síndico Municipal, está demostrado, no tenía facultades para hacerlo, no había una sola disposición legal que le diera esa facultad para hacerlo. Es cierto, que el artículo 132 de la Ley del Municipio Libre, al Cabildo le da facultades para poder sancionar a los servidores públicos, pero no a aquellos que fueron electos por el voto de la ciudadanía, a esos, solamente de acuerdo a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I, párrafo tercero, al único que le da facultades para poder sancionar, para poder suspender a quienes fueron electos por el voto popular es al Congreso del Estado, por lo tanto, con los elementos que nos ha dado la Comisión de Responsabilidades, nos determina con precisión que los munícipes, en ese tiempo se arrogaron facultades que ninguna disposición legal les establecía para ese acto en particular, en que incurrieron ellos. Por eso es importante en tener en claro una cosa, la composición del Cabildo no es producto de una casualidad, en la composición del Cabildo, hay regidores de todos los partidos políticos que tiene representación, que la gente votó por ello, para que estuvieran ahí, para que defendieran los intereses, lo que se cometió con ese acto, es algo sumamente delicado, no solo por el Ayuntamiento de Colima, del período 2000-2003, sino por lo que representa para todos los ayuntamientos del Estado, presentes y futuros. Innegablemente, que si hubiese algún integrante del Cabildo, nada más porque no está de acuerdo con la forma de pensar del Presidente Municipal, o de la mayoría de los integrantes del Cabildo, nada más por esa razón, van a poder suspenderlo, que delicado, porque va contra el espíritu fundamental de la composición del Cabildo. El espíritu es que precisamente estén representados ahí, la minoría para que también puedan defender sus intereses, los

intereses de la gente que representan, que lamentable, que pudiéramos nosotros desde el Congreso, no mandar una señal muy clara de que ese tipo de actos en donde un Presidente o una mayoría de los integrantes del Cabildo, nada más porque alguien de sus compañeros no están de acuerdo con él, van a tener la posibilidad en el momento que quieran de poder suspenderlo, eso me parece sumamente lamentable. Los compañeros y amigos de Acción Nacional, no quieren entrar a ese tema, me parece que si debemos analizarlo, por lo que representa para la sociedad colimense, y para lo que es la pluralidad, la democracia política en la que participamos. Yo coincido con el señalamiento que hacen los compañeros Diputados del Partido Acción Nacional, cuando señalan que en el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que en materia federal solo podrá iniciarse y –ojo- iniciarse, durante el período en que, el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, eso si es cierto, y eso también lo establece la Constitución Política local, y la federal también señala que las sanciones solamente podrán aplicarse en un período no mayor de un año, a partir de que se inicia el procedimiento, pero eso, es aplicable y se ha dicho varias veces, exclusivamente para los servidores públicos federales, no establece en ningún lado de la constitución, que esto pueda tener aplicación para los estados y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8º y 9º ahí si dice que para el caso de los Estados, en las propias constituciones políticas, deben de establecer los procedimientos para poder aplicar los juicios políticos, como es el caso que se esta tratando, ahí es en donde se debe de determinar el procedimiento y en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que es la que nos rige a nosotros ahí establece, la responsabilidad por faltas oficiales solo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y hasta un año después, hay que señalarlo con toda precisión, el juicio político contra los seis munícipes, se inició en tiempo y forma. La Constitución Política local, en ningún momento señala que la sanción se deba aplicar en ningún período lo deja abierto, por lo tanto, en lo personal, estoy convencido que el dictamen que presenta la Comisión de Responsabilidades, es apegado a derecho. En lo personal estoy convencido que si procede la aplicación de la sanción, la determinación en la parte que le corresponde al Congreso del Estado de la sanción. Yo respeto pero no coincido con algunos compañeros Diputados que me antecedieron en el uso de la voz, cuando dicen que no se vale violar una ley, o aplicar una sanción violando una ley, para sancionar una violación. Sigo convencido, el posicionamiento, el dictamen que se esta presentando y que se esta proponiendo a consideración del pleno del Congreso, esta sustentado en la Ley que nos rige, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ColimaCDC..... se hablaba de que habría que darles el derecho de la seguridad jurídica, a quienes son involucrados, en este caso a los seis regidores, al respecto, es importante señalar que la Comisión de Responsabilidades, le dio lo que la constitución establece, el derecho de audiencia, se les citó, se les dio la oportunidad de que presentaran todos los elementos que a su derecho convenía, para tratar de demostrar que su acto fue apegado a la ley, hay que señalarlo, se les recibieron, nada más que los elementos que presentaron no fueron suficientes como para poder desacreditar la demanda que estaban presentando, no fueron suficientes para poder demostrar que su acción fue apegada a derecho. Yo coincido cuando se habla de que hay que afinar más las disposiciones legales, yo creo que si valdría la pena de que el Congreso del Estado, pudiéramos en fechas futuras, tener reuniones para ver si vale la pena que podamos establecer algunas fechas para poder aplicar las sanciones, pero eso hay que definirlo. Actualmente no esta definido, por eso el que hoy el Congreso del Estado, se erija en jurado de acusación, es totalmente legal. Se habla de que a Marta Sosa, no se le dieron, que fue una acción que ella esta amparándose y que no se ha definido, por lo menos, con todos los elementos que yo conozco, del asunto

de Martha Sosa, se ha amparado en varias ocasiones, todas las que se han resuelto, se han resuelto en su contra, implica que las acciones que en su momento tomó el Congreso del Estado, fueron totalmente apegadas a derecho. Se habla de que este dictamen no guarda el principio de imparcialidad del acusador, en lo personal, no coincido con esa tesis, hay que recordar que la Comisión de Responsabilidades, que esta emitiendo un dictamen no esta conformada por Diputados de un solo partido político, hay que recordar aquí, en esta tribuna, que la Comisión de Responsabilidades, tiene integrantes del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional. Por lo tanto, no fue una decisión de carácter político porque convenga a un partido político en particular. Obviamente yo no coincido porque si bien es cierto que la compañera Diputada integrante del Partido Acción Nacional no estampó su firma, votando a favor del dictamen, tampoco lo votó en contra, por eso la sorpresa del compañero Diputado Presidente de la Comisión, que sin haber manifestado su inconformidad en las reuniones de trabajo cuando se analiza este dictamen, hoy se presente un punto, no, no punto de acuerdo, sino un dictamen en sentido diferente al que se había presentado por la Comisión de Responsabilidades, pero también hay que decirlo, el dictamen que se presenta por la Comisión de Responsabilidades, viene firmado por lo menos por Diputados integrantes de dos partidos políticos, y no es entonces, una venganza política de un partido político en particular, sobre ello, obviamente no coincido con la compañera Diputada que me antecedió en el uso de la voz, cuando dice que es una venganza porque la mayoría de la gente esta votando por un partido político diferente y no coincido simplemente porque la voluntad de la gente, se ha visto reflejada en las urnas y en la gente que ha decidido quien esta cada quien en su posición, y obviamente los resultados, por lo menos, la interpretación que yo les doy son totalmente diferentes a la interpretación que se le viene dando. Finalmente yo concluyo diciendo mi apreciación personal, el dictamen que el día de hoy nos presenta la Comisión de Responsabilidades, en cada uno de los aspectos que lo conforman tiene todo un análisis y en cada uno de esos aspectos, también viene los fundamentos legales en que se basan para poder fijar el posicionamiento del dictamen final. Por eso yo aprovecho para felicitar a la Comisión de Responsabilidades. Es cuanto Diputada Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Por solicitarlo así, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, solicitándole se someta al artículo 156 y se limite al asunto que nos ocupa.

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con la advertencia de la Diputada Presidenta, por supuesto que estoy en el tema. Comentar respecto del asunto que estamos tratando, que como ya lo comentaba queda para los compañeros de la fracción del PRI y algunos otros compañeros del PRD, también, no queda acreditado la, que la legislación federal por conducto de la Constitución aplique en este asunto, si bien yo quiero recordarles que como en todos los asuntos, todos los asuntos tienen forma y tienen fondo. Para poder entrar el fondo de cualquier asunto, se tiene que estudiar primero la forma. Y si se cumple con la forma se puede entrar al fondo del asunto sino no se puede entrar al fondo del asunto, y en la forma hablamos, bueno, plazos, requisitos, personas autorizadas, instancias legales autorizadas para resolver el asunto y en este caso estamos hablando de, precisamente de la forma, de los requisitos que se tiene que dar para que pueda actuar o no una comisión o una instancia para resolver un asunto, y ¿por qué los asuntos prescriben?, pues porque debe de haber la seguridad jurídica que ya comentábamos, que lo que comentaba ahí el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, se refería al derecho, al debido

procedimiento, en donde se le tiene que garantizar la garantía de audiencia a toda persona sujeta a un proceso. Entonces, si hablamos de la forma, en cualquier asunto cuando vamos a pedir, un permiso, cuando vamos a presentar una denuncia, siempre se tienen que cumplir los requisitos de forma, si no, nos es imposible a acceder al derecho que tenemos previsto. En el caso de una denuncia, pues se tienen que cumplir con los requisitos, y si bueno, si la persona cometió el delito en un tiempo que ya había prescrito, pues ya no puedes hacer que cumpla o que pague, porque ya se te pasó el tiempo, para eso hay plazos, para que se puedan ejercer los derechos y para que las autoridades cumplan con sus obligaciones, si se le pasó el plazo a esta instancia, a este Congreso del Estado y no cumplió en tiempo, pues de quien es responsabilidad, de la propia Comisión de este Congreso del Estado, entonces, es ahí en donde estamos hablando de la falta pues de actuación en tiempo y forma de las autoridades de aquí del Estado y bueno cada quien tiene su tiempo para, si bien se habla, el derecho a presentar la denuncia, ante aquí del Congreso del Estado, se hizo en tiempo, efectivamente dentro del plazo que establece la Constitución, pero bueno, el Congreso no esta resolviendo en tiempo. Entonces, no podemos como ya se comentaba, dejar en la indefinición, yo le preguntaría a cualquiera de los compañeros aquí, que integran esta Asamblea, si estaría de acuerdo en que un Juicio Político, en esta instancia, dure aquí 5, 6, 3, años, y que le impida participar en un proceso electoral, por lo que muchos tienen aspiraciones políticas, yo creo que a nadie le gustaría, verdad, lo que queremos que se resuelva pronto, en tiempo y que definamos la situación, para que bueno, podamos recurrir ante las demás instancias y resolver de manera definitiva el asunto. Es de ello de lo que hablamos. Se hablaba también de la Contadora Marta Leticia Sosa Govea, y se dice que bueno, todos los amparos se le han resuelto de manera desfavorable, así es hasta el momento, lo cual no quiere decir que le haya prescrito su derecho o que ya no tenga ninguna instancia o ningún derecho que recurrir, es un asunto que todavía no esta definido, por lo tanto.....

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Diputada Esmeralda Cárdenas, se le solicita se ajuste al tema.

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Diputada Presidenta, estoy haciendo referencia a la intervención que comentó el Diputado, es por alusiones personales, no estoy fuera de tema, sino se lo hubiera señalado también al Diputado que estaba fuera de tema en ese sentido. En el sentido que señalaba, que bueno, el artículo 126 de la Constitución no establece el plazo, hay una propuesta por parte de la fracción parlamentaria de acción nacional de una nueva Ley de Responsabilidades, en la que ya se establecen y también una reforma a la Constitución en donde ya se establece este plazo de un año, para que quede perfectamente establecido y no tengamos que estar recurriendo a la normatividad federal, cuando podemos, como Legisladores establecerlo perfectamente aquí en el Estado. Es cuanto.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Habiéndose agotados las intervenciones, esta Presidencia solicita a la Secretaría..... ampliamente discutido el asunto que nos ocupa, solicito a la Secretaría recaba la votación correspondiente. Solicito se someta a votación.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta.....

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se solicita un receso. Se les concede un receso..... RECESO..... Se reanuda la sesión. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si se considera suficientemente discutido el asunto que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el tema que nos ocupa, favor de manifestarlo levantando su mano. Informo Diputada Presidenta que se aprueba por mayoría.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Habiéndose agotadas las intervenciones, esta Presidencia solicita a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, si se aprueba el documento que acaba de ser leído. Por la afirmativa.

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por la negativa.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Se procederá a recabar la votación de la Directiva. Aguirre, a favor.

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, en contra.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Hilda Ceballos, a favor.

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 15 votos a favor.

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Diputada Presidenta que se tienen 8 votos en contra y dos abstenciones.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el documento que nos ocupa. Túrnese el expediente respectivo al H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para los efectos legales correspondientes y así mismo, por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, notifíquese la presente resolución a las partes. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta de esta Sesión, por cinco minutos.....RECESO..... Se reanuda la Sesión, en el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al acta de la presente sesión.

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR..... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. En virtud de así solicitarlo, se le concede el uso de palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Solamente para comentar que dentro del acta, conforme lo establece el Reglamento y conforme ha quedado en el Diario de los Debates, se señale cual ha sido la intención de mi intervención, porque creo que queda de manera ambigua. Si le pido que quede más clara la intención de la opinión. Es cuanto,

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se haga la corrección. Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Antero.

DIP. ANTERO VALLE. Con su venía Diputada Presidenta. Únicamente también apuntarme al señalamiento de la Diputada Esmeralda Cárdenas, en el sentido de que en referencia a mi participación, únicamente se hace una introducción muy acotada y que también se alimiente del Diario de los Debates, inclusive hubo una copia de las mismas que se les hizo llegar al área correspondiente para que el acta, que es un documento muy importante en este Congreso del Estado, asiente de una manera más apegada al desarrollo de esta Sesión, el contenido de las mismas. Es cuanto Diputada Presidenta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se haga la corrección de acuerdo al Diario de los Debates. Bien. Como ningún Diputado, instruyo a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los ciudadanos Diputados y Diputadas, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Se hace la aclaración que con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Mesa Directiva. Conforme al Diario de los Debates. Sírvanse levantar su mano nuevamente. Informo ciudadana Presidenta que es aprobada el acta, con las modificaciones propuestas, que se harán conforme al Diario de los Debates y que fue aprobado por unanimidad la presente acta.

DIP. PDTA. CEBALLOS LLERENAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que fue leída. En el deshago del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros Diputados, a la Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día 21 de junio del presente año a partir de las 11 horas.

Agotados los puntos del orden del día, se ruega a los compañeras y compañeros Diputados ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las dieciséis horas con 10 minutos del día 14 de junio del año 2005. Declaro clausurada esta Sesión. Muchas gracias. (Les solicito a los compañeros no retirarse para compartir algo, un comentario aquí sobre el asunto del volcán.)